



## OFICIO

S/REF.: Expediente nº 00001-00083609  
FECHA: 12 de diciembre de 2023  
ASUNTO: Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras

DESTINATARIO: [REDACTED]

El día 3 de noviembre de 2023 tuvo entrada en esta Dirección General una solicitud de información efectuada por [REDACTED] a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

*“El nº de inmigrantes que han estado ingresado en el CIE de Algeciras y las causas por las que han sido ingresado. Así mismo por la nacionalidad de los mismos y el número de expulsiones ejecutadas. Todo ello referido a los seis primeros meses de 2023”*

Una vez analizada la petición, este Centro Directivo ha resuelto **conceder el acceso parcial** a la información solicitada, conforme al artículo 16 de la LTAIPBG, que reseña: *“En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida”*.

Se significa que el primer semestre del año 2023 ingresaron un total de **139** extranjeros en el CIE de Algeciras por los siguientes motivos:

MOTIVO INGRESO	INGRESOS
ART. 15.1 R.D. 240/2007 POR RAZONES DE SEGURIDAD PUBLICA	4
ART. 53.1 A) L.O. 4/2000 POR ESTANCIA IRREGULAR	88
ART- 53.1 E) L.O. 4/2000 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES LEVES	1
ART. 54.1 A) L.O. 4/2000 ACTIVIDADES CONTR LA SEGURIDAD NACIONAL O QUE PERJUDIQUEN LAS RELACIONES CON OTROS PAISES	2
ART. 57.2) L.O. 4/2000 POR HABER SIDO CONDENADO	8
ART. 58.3. A) L.O. 4/2000 PROH. DE ENTRADA POR OTRO ESTADO SCHENGEN (LISTA SIS)	11
ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN PATERA	17
ART. 58.3 B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN VEHICULOS	1
ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL POR OTROS MEDIOS	1
ART. 58.3.A) L.O. 4/2000 POR PROHIBICION DE ENTRADA EXPULSION ADMINISTRATIVA	5
ART. 89.2 CP EXP. JUDICIAL SUSTITUCION PENA MAYOR DE 5 ANOS	1
<b>Total general</b>	<b>139</b>



Señalar que **no existe una correlación ni correspondencia entre datos de ingreso y de expulsiones** por variables de distinta naturaleza como puede ser traslados entre CIEs o puestas en libertad, entre otros.

Asimismo, en lo que respecta a las **expulsiones ejecutadas**, durante el primer semestre del año 2023 se han realizado un total de **57 salidas por motivo de expulsión** desde el CIE de Algeciras.

Asimismo se significa que no se remiten datos sobre personas de una **nacionalidad** concreta internadas, expulsadas o devueltas, ya que la difusión de este tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones, aplicándose en esta parte de la información el **Artículo 14.1.c)** de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Esta limitación ha sido avalada por propio el Consejo de Transparencia en numerosas ocasiones, citando como las más recientes **R/304/2020, R/191/2020, R/876/2020, estableciendo un criterio claro al respecto**, manifestando en ellas que *“dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, considera que el conocimiento de la restante información solicitada sí podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen. Asimismo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, las dificultades derivadas de su identificación podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida”*.

*(...) “No debe dejarse de lado la situación de nuestro país respecto de la inmigración de carácter irregular. En efecto, no se desconoce la importancia de la presión migratoria que sufre España, en su consideración de frontera exterior de la Unión Europea, así como de la importancia de la adopción y puesta en marcha efectiva de políticas que favorezcan los flujos migratorios de carácter regular, así como la lucha contra la trata de seres humanos que, en ocasiones, están implicados en estas situaciones irregulares. Esta labor de vigilancia y control de situaciones contrarias a la normativa vigente en materia de inmigración y asilo requiere de la colaboración de los países de origen, tanto para la tramitación de los expedientes de expulsión como para la adopción de medidas que frenen la trata de seres humanos”*.

*Teniendo esto en consideración, y especialmente la incidencia en la efectividad de las medidas adoptadas para el control de la inmigración irregular y la trata de seres humanos que se derivaría del acceso a la información solicitada, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que no existe un interés superior que justifique que se proporcione la información”*.

En definitiva, (...) "puesto que el elemento clave de la solicitud de acceso es precisamente conocer la información por el país de origen, elemento que es el que puede acarrear los problemas en las relaciones exteriores de España en lo que respecta a la tramitación de los expedientes de expulsión".

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**

 **Francisco Pardo Piqueras**

